



Asamblea General

Distr. general
18 de septiembre de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 88º período de sesiones, 24 a 28 de agosto de 2020

Opinión núm. 36/2020, relativa a Đào Quang Thực (Viet Nam)*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 31 de enero de 2020 al Gobierno de Viet Nam una comunicación relativa a Đào Quang Thực. El Gobierno respondió con retraso el 13 de mayo de 2020. Viet Nam es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);
 - d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

* Seong-Phil Hong no participó en el examen del presente caso.



e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Đào Quang Thực, nacido en 1960, era ciudadano vietnamita, veterano de guerra, maestro de escuela primaria retirado, periodista y bloguero. Tenía su residencia habitual en el distrito de Nga Sơn (provincia de Thanh Hóa).

5. El Sr. Thực escribía en los medios sociales acerca de la política del Gobierno vietnamita. Sus comentarios en línea abarcaban toda una serie de temas políticos, pero se centraban sobre todo en el modo en que se gestionaban las cuestiones ambientales. En particular, el Sr. Thực se unió a otros activistas y organizaciones de defensa del medio ambiente para criticar pacíficamente la respuesta del Estado ante el derrame de sustancias químicas que se produjo en la planta siderúrgica de Formosa en 2016. También utilizaba los medios sociales para criticar la forma en que Viet Nam había afrontado una controversia territorial con China.

a) Detención y prisión preventiva

6. Según la fuente, el Sr. Thực fue detenido en su domicilio el 5 de octubre de 2017, poco después de publicar un comentario en línea relativo al modo en que el Gobierno había gestionado la controversia territorial del mar de China meridional. Fue acusado, en virtud del artículo 79 del Código Penal de 1999, de “llevar a cabo actividades encaminadas a derrocar al Gobierno popular”.

7. El Sr. Thực permaneció en prisión preventiva durante 11 meses en el centro de reclusión de Cham Mat, en la provincia de Hòa Bình. La fuente alega que, durante dos meses, los agentes de policía ordenaron al centro que limitara considerablemente el suministro de alimentos del Sr. Thực. Su familia tampoco pudo llevarle comida ni enviarle dinero para que lo gastara en la cantina del centro de reclusión.

8. La fuente afirma además que el Sr. Thực fue golpeado y torturado por agentes de policía que pretendían obligarlo a admitir las acusaciones formuladas contra él. Gozaba de buena salud hasta inmediatamente antes de su detención. Sin embargo, las lesiones sufridas durante el tiempo que permaneció en prisión preventiva le causaron graves migrañas que dieron lugar a su hospitalización durante una semana en abril de 2018. Aunque los familiares del Sr. Thực no estaban autorizados a visitarlo en el centro de reclusión, se les concedieron derechos de visita muy limitados mientras estuvo en el hospital.

9. La fuente informa de que, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal de 2003, el acusado puede permanecer recluido durante un máximo de cuatro meses mientras se lleva a cabo la investigación. Cuando las circunstancias del caso revisten particular complejidad y se requiere una investigación más a fondo, es posible solicitar una prórroga del período de reclusión. En un principio, estaba previsto que la prisión preventiva del Sr. Thực finalizase el 5 de febrero de 2018. Sin embargo, a finales de enero de 2018, esta se prorrogó por otros siete meses, hasta la vista del juicio en primera instancia, celebrada el 19 de septiembre de 2018. La fuente afirma que no había ninguna razón evidente por la que se pudiera considerar necesaria esa prórroga y que no se dispone de pruebas que la justifiquen.

10. En junio de 2018, la familia del Sr. Thực nombró y dio instrucciones a un abogado para que lo representara. Sin embargo, este solo pudo mantener dos reuniones breves con él antes del juicio, y ninguna de ellas duró más de una hora.

b) Actuaciones judiciales y proceso de apelación

11. La fuente informa de que el caso del Sr. Thục fue juzgado por los jueces integrantes del Tribunal Popular de la provincia de Hòa Bình el 19 de septiembre de 2018. La vista se prolongó desde las 8.00 hasta las 13.00 horas. Al término de las actuaciones, se condenó al Sr. Thục a 14 años de prisión y otros 5 años de arresto domiciliario.

12. Según la fuente, no se permitió declarar durante el juicio a ninguno de los 15 testigos de la defensa y solo se concedió acceso a la sala a dos familiares cercanos. La fuente alega que agentes de la policía de Viet Nam bloquearon las calles circundantes al Tribunal Popular de la provincia de Hòa Bình para impedir que el público asistiera al juicio. Había una notable presencia policial en los alrededores a fin de disuadir a los activistas locales de que protestasen, y las informaciones de los medios de comunicación muestran una fuerte presencia militar dentro de la propia sala del tribunal.

13. El Sr. Thục recurrió el fallo condenatorio y la pena en una vista celebrada el 17 de enero de 2019. La fuente declara que solo pudo reunirse con su abogado durante dos horas para preparar el recurso. Aunque se confirmó la condena, la pena de prisión se redujo en un año por buena conducta y por haber trabajado como maestro de escuela primaria durante más de tres décadas. En consecuencia, la sentencia se modificó a 13 años de prisión y 5 años de arresto domiciliario. Se confinó al Sr. Thục en el centro penitenciario núm. 6, en la provincia de Nghệ An, aunque se ignora en qué momento fue trasladado allí.

c) Fallecimiento del Sr. Thục

14. El 10 de junio de 2019, el Sr. Thục inició una huelga de hambre por las malas condiciones de reclusión en el centro penitenciario núm. 6. La huelga de hambre fue una respuesta a la retirada por parte de las autoridades penitenciarias de los ventiladores eléctricos que había en las celdas. Esto sucedió en una época de temperaturas muy elevadas, que algunos días llegaron a alcanzar los 40° C. El Sr. Thục se mantuvo en huelga de hambre durante más de cinco semanas y puso fin a esta cuando se volvieron a instalar los ventiladores.

15. La fuente informa de que, en la tarde del 3 de diciembre de 2019, el Sr. Thục fue trasladado al hospital Hữu Nghị Đa Khoa, en la provincia de Nghệ An. Las autoridades notificaron el traslado a sus familiares en la mañana del 4 de diciembre de 2019. Solo se les dijo que el Sr. Thục no se encontraba bien, sin dar más detalles. Cuando llegaron al hospital, la noche del 4 de diciembre de 2019, el Sr. Thục estaba en coma. Se informó a sus familiares de que este había sufrido una hemorragia cerebral y padecía bronquitis. Solo se les permitía visitarlo entre las 16.00 y las 22.00 horas, aunque el horario de visita para los demás pacientes de ese pabellón se extendía desde las 16.00 hasta las 7.00 horas. El 10 de diciembre de 2019, los familiares del Sr. Thục acudieron al hospital por la mañana. Ese día, en torno a las 8.30 horas, el personal del hospital certificó el fallecimiento del Sr. Thục. Sus familiares no se encontraban a su lado y no se les permitió visitarlo en la sala de urgencias, a la que había sido trasladado. Esa misma mañana, más tarde, se les comunicó que el cuerpo había sido trasladado a la morgue.

16. Según la fuente, en la tarde del 10 de diciembre de 2019, los familiares del Sr. Thục se reunieron con los guardias de la prisión, quienes confirmaron que el Sr. Thục sería enterrado en el recinto penitenciario. Cuando los familiares del Sr. Thục solicitaron que se les entregara el cuerpo para celebrar un funeral privado en un lugar más cercano a su domicilio, los guardias los informaron de que, con arreglo a la legislación nacional, el cuerpo debía permanecer tres años en el recinto penitenciario antes de que tuviesen derecho a reclamarlo. Los familiares del Sr. Thục, junto con su abogado, hicieron averiguaciones para saber si existía la posibilidad de impugnar esa ley, pero se les dijo que no se podía hacer nada. Los guardias de la prisión también les comunicaron que se realizaría una autopsia a fin de establecer la causa de la muerte. A pesar de que los familiares del Sr. Thục no dieron su consentimiento para la autopsia, esta se realizó en el hospital. No se comunicaron a la familia los resultados.

17. El funeral del Sr. Thục se celebró el 10 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 17.00 horas, en el centro penitenciario núm. 6, en la provincia de Nghệ An. Solo asistieron los familiares directos del Sr. Thục. Sus familiares menos allegados y sus amigos

viven, en su mayor parte, en la provincia de Thanh Hóa, que se encuentra a aproximadamente siete horas en automóvil de la prisión. Muchos de los amigos y familiares del Sr. Thực emprendieron el viaje poco después de conocer la noticia de su muerte, pero no pudieron asistir al funeral. No se consultó a los familiares del Sr. Thực acerca de la ceremonia fúnebre ni se les dio la oportunidad de opinar al respecto. Solicitaron el traslado del cuerpo al domicilio familiar durante unos días después de su muerte, para que la comunidad pudiera presentar sus respetos. La solicitud fue denegada. La fuente informa de que no se ha permitido a los familiares del Sr. Thực visitar su tumba desde el funeral. Cuando este se celebró, preguntaron si sería preciso presentar una solicitud formal a la prisión para visitar la tumba del Sr. Thực.

18. Según la fuente, las autoridades han dado muy poca información sobre los problemas de salud que llevaron a que el Sr. Thực fuese trasladado al hospital y sobre si recibió o estaba recibiendo algún tratamiento médico durante su reclusión. Sus familiares y amigos sienten gran pesadumbre y desconcierto por las circunstancias que dieron lugar a su fallecimiento.

19. La fuente alega que la salud del Sr. Thực se deterioró rápidamente tras su detención. Durante el tiempo que permaneció en prisión preventiva se restringió la cantidad de alimentos que recibía. Fue golpeado y torturado por agentes de policía y sufrió lesiones que le causaron graves migrañas y lo llevaron a ser hospitalizado durante una semana en abril de 2018. No está claro si esas lesiones fueron un factor que contribuyó a su muerte. La fuente subraya que el Gobierno debe llevar a cabo con la máxima urgencia una investigación completa, transparente, independiente y eficaz de las circunstancias que condujeron a la muerte del Sr. Thực, que incluya un informe detallado sobre las medidas que adoptaron las autoridades penitenciarias, si acaso adoptaron alguna, para ocuparse del Sr. Thực mientras este permaneció privado de libertad.

d) Análisis de las vulneraciones cometidas

20. La fuente sostiene que la privación de libertad del Sr. Thực fue arbitraria con arreglo a las categorías I, II y III.

i. Categoría I

21. La reclusión del Sr. Thực fue arbitraria porque carecía de fundamento jurídico. La privación de libertad es arbitraria cuando se procesa a una persona en virtud de una ley vaga o demasiado amplia. El artículo 9, párrafo 1, del Pacto garantiza que la privación de libertad de una persona solo estará justificada cuando se derive de las causas fijadas por la ley. Si la causa que justifica la reclusión de la persona no está claramente establecida en la legislación nacional¹, carecerá de fundamento jurídico legítimo en virtud del artículo 9 del Pacto.

22. De conformidad con el artículo 11, párrafo 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 15, párrafo 1, del Pacto, las personas tienen derecho a conocer el contenido de la ley y saber qué conductas la vulneran. El Comité de Derechos Humanos ha señalado que todas las razones sustantivas para la detención o la reclusión deberán estar prescritas por la ley y definidas con suficiente precisión a fin de evitar una interpretación o aplicación excesivamente amplias o arbitrarias².

23. La fuente sostiene que el artículo 79 del Código Penal de 1999, la disposición en virtud de la cual el Sr. Thực fue detenido, recluso y condenado, no cumple con el criterio de precisión que exige el derecho internacional de los derechos humanos y, por lo tanto, no puede constituir el fundamento jurídico de su privación de libertad. El artículo 79 sanciona las actividades realizadas con la intención de derrocar al Gobierno popular, pero no define claramente en qué consiste esa intención. Además, el artículo 79 no establece ningún límite a las actividades u organizaciones constitutivas de delito. Esto da lugar a un riesgo significativo de que la ley se aplique de manera arbitraria, como en el caso del Sr. Thực, lo que vulnera el principio de legalidad.

¹ Comité de Derechos Humanos, *McLawrence c. Jamaica* (CCPR/C/60/D/702/1996), párr. 5.5.

² Véase la observación general núm. 35 (2014) del Comité de Derechos Humanos, relativa a la libertad y seguridad personales, párr. 22.

ii. Categoría II

24. El Sr. Thúc fue recluido por ejercer su derecho a la libertad de opinión y de expresión, en contravención del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto. Al condenar al Sr. Thúc, el Gobierno buscaba crear un efecto disuasorio, a fin de desalentar a otras personas de criticar al Estado. Poco antes de su detención, el Sr. Thúc había expresado su oposición a la política del Gobierno a través de los medios sociales. El hecho de que lo detuvieran después de publicar en Internet críticas al Gobierno encaja con la pauta de supresión del activismo político por parte de las autoridades vietnamitas.

25. Conforme al artículo 19, párrafo 3, del Pacto, la injerencia en el derecho de una persona a la libertad de expresión solo se justifica en circunstancias limitadas. La restricción de ese derecho debe estar expresamente fijada por la ley, perseguir un fin legítimo y cumplir los criterios de necesidad y proporcionalidad. La detención, la condena y la reclusión del Sr. Thúc no cumplieron estos requisitos.

26. La fuente sostiene que la privación de libertad del Sr. Thúc en virtud del artículo 79 del Código Penal no cumplió el requisito de estar expresamente fijada por la ley, como establece el artículo 19, párrafo 3, del Pacto. Como se ha señalado anteriormente, el artículo 79 del Código Penal no aclara los parámetros de la conducta delictiva. La imprecisión de esta disposición vulnera el principio de seguridad jurídica. La ambigüedad del artículo 79 proporciona a las autoridades vietnamitas un medio ilimitado para impedir toda expresión crítica. El artículo 79 no se ajusta a derecho y es incompatible con las obligaciones internacionales que incumben a Viet Nam en virtud del artículo 19 del Pacto.

27. Además, la restricción del derecho a la libertad de expresión del Sr. Thúc no servía a un fin legítimo. En virtud del artículo 19, párrafo 3, del Pacto, el derecho a la libertad de expresión puede estar sujeto a ciertas restricciones, pero solo si estas persiguen unos determinados fines, a saber, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Sin embargo, estas causas, incluidas las restricciones basadas en la seguridad nacional, tienen un alcance limitado. El Comité de Derechos Humanos ha reconocido que los Estados deben procurar con el mayor cuidado que las leyes sobre traición y las disposiciones similares que se refieren a la seguridad nacional estén redactadas y se apliquen de conformidad con las condiciones estrictas del artículo 19, párrafo 3³. En consecuencia, únicamente puede restringirse la libertad de expresión por motivos relacionados con la seguridad nacional cuando: a) la expresión tiene la finalidad de incitar violencia inminente; b) bien pudiera dar lugar a tal violencia, y c) existe una conexión directa e inmediata entre la expresión y la probabilidad o el acontecimiento de tal violencia⁴.

28. Para restringir la libertad de expresión en aras de un fin legítimo, el Estado debe demostrar que las actividades de la persona detenida fueron violentas o incitaron a la violencia. No basta con limitarse a afirmar que una persona participó en actividades que buscaban derrocar al Gobierno. Las autoridades vietnamitas no demostraron que las expresiones del Sr. Thúc incitaran a la violencia o representaran una amenaza para la seguridad nacional. Durante el juicio, la fiscalía solo presentó pruebas que daban a entender que el Sr. Thúc había conectado en línea con personas de ideas afines y opiniones políticas similares a las suyas. No hay pruebas que indiquen que los contactos del Sr. Thúc tuvieran la intención o la capacidad de incitar a un comportamiento violento. Su participación en línea en relación con cuestiones de actualidad siempre se llevó a cabo a título individual y de manera pacífica.

29. Toda restricción de la libertad de expresión por motivos de seguridad nacional no será legítima si su propósito genuino o su efecto demostrable es el de proteger intereses inconexos con la seguridad nacional, incluso el de proteger a un Gobierno de una situación

³ Observación general núm. 34 (2011), relativa a la libertad de opinión y la libertad de expresión, párr. 30.

⁴ Principios de Johannesburgo sobre Seguridad Nacional, Libertad de Expresión y Acceso a la Información, principio 6.

embarazosa o de la revelación de algún delito⁵. El Comité de Derechos Humanos ha afirmado claramente que no se pueden hacer valer los objetivos de la unidad nacional o el orden público como justificación para silenciar a los defensores de la democracia pluripartidista, los principios democráticos y los derechos humanos⁶. La fuente alega que, contrariamente a los cargos formulados contra él, las tentativas del Sr. Thục de investigar la corrupción o los daños al medio ambiente no significan que estuviera tratando de derrocar al Gobierno. Su condena se basó en un abuso por parte de las autoridades de la formulación excesivamente amplia del artículo 79 del Código Penal, que no circunscribe el alcance de las actividades prohibidas.

30. Además, toda restricción de la libertad de expresión debe ser necesaria y proporcionada. Es decir, debe ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado⁷. El Comité de Derechos Humanos ha establecido que es pertinente tener en cuenta la naturaleza de la expresión al evaluar si una restricción es necesaria y proporcionada. A este respecto, no deben imponerse restricciones a la discusión de políticas del Gobierno y el debate político; la información sobre los derechos humanos, las actividades del Gobierno y la corrupción en el Gobierno; la participación en campañas electorales, manifestaciones pacíficas o actividades políticas en pro de la paz y la democracia, en particular, y la expresión de opiniones o discrepancias, ideas religiosas o creencias, entre otros, por miembros de minorías o de grupos vulnerables⁸.

31. La fuente sostiene que la labor del Sr. Thục como periodista se inscribe en las formas de expresión mencionadas, que no deben ser restringidas. Su detención y reclusión fue consecuencia directa de sus comentarios políticos, en los que criticaba la mala actuación del Gobierno en materia de derechos humanos y su política medioambiental. La prisión preventiva que se impuso al Sr. Thục fue totalmente desproporcionada y no puede considerarse la medida menos perturbadora. Según la fuente, su caso es un ejemplo de la imposición por parte de un Estado de sanciones enormemente desproporcionadas con respecto a cualquier daño percibido.

32. Además, la privación de libertad del Sr. Thục fue arbitraria por cuanto resultó del ejercicio de su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 25 a) del Pacto. Según el Comité de Derechos Humanos, el artículo 25 del Pacto protege a las personas que ejercen influencia mediante el debate y el diálogo públicos con sus representantes y gracias a su capacidad para organizarse. Esta libertad debe aplicarse por igual a todos los ciudadanos, independientemente de sus opiniones políticas, y solo puede restringirse mediante una medida razonable y objetiva⁹.

33. La detención, la condena y la reclusión del Sr. Thục se llevaron a cabo como parte de una campaña más amplia de las autoridades vietnamitas dirigida a suprimir las críticas al Gobierno. Fue privado de libertad tras participar en debates sobre una serie de cuestiones políticas, como la política medioambiental del Gobierno. Al expresar sus opiniones políticas en línea, el Sr. Thục pretendía contribuir de manera directa a los esfuerzos por lograr que las autoridades rindiesen cuentas. La restricción de sus derechos se basó en su disidencia política. La fuente señala que las autoridades han detenido a muchos periodistas independientes por informar sobre la catástrofe de la planta siderúrgica de Formosa.

iii. Categoría III

34. La fuente declara que la reclusión del Sr. Thục fue arbitraria porque se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, lo que supone una violación del artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14, párrafo 2, del Pacto. Además, de conformidad con el principio 36 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, las

⁵ *Ibid.*, principio 2 b).

⁶ Observación general núm. 34, párr. 23.

⁷ *Ibid.*, párr. 34.

⁸ Resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos, párr. 5 p).

⁹ Observación general núm. 25 (1996), relativa a la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, párrs. 3, 4 y 8.

restricciones que se le impusieron durante su detención y reclusión deberían haberse limitado a las estrictamente necesarias para la administración de justicia. Está prohibida cualquier otra restricción, dado que se presume la inocencia hasta que se dicta condena.

35. Durante el tiempo que pasó en prisión preventiva, el Sr. Thục fue objeto de castigos, lo que es contrario a la presunción de inocencia. No pudo recibir dinero de su familia durante una parte considerable del período que pasó en prisión preventiva. En Viet Nam, por lo general se permite a los reclusos recibir dinero de sus familias y esos fondos se convierten en vales de prisión. Esa restricción de los derechos del Sr. Thục no cumplía ningún fin legítimo al amparo del principio 36, párrafo 2, del Conjunto de Principios, como el de ser necesario para el proceso de instrucción o el mantenimiento de la seguridad y el orden en el lugar de detención. Además, las restricciones a las comunicaciones del Sr. Thục con sus familiares no estaban justificadas. No consta que sus familiares hayan participado en ninguna actividad delictiva ni hay indicios que indiquen que sus visitas hubiesen generado desorden o puesto en peligro la seguridad del centro de reclusión.

36. En junio de 2019, el Sr. Thục y otros presos de conciencia se declararon en huelga de hambre, exigiendo un mayor acceso a las visitas de familiares. La huelga de hambre fue también una reacción al calor sofocante que el Sr. Thục tenía que soportar en su celda, sin ningún tipo de aire acondicionado o ventilador. Finalmente se instalaron ventiladores y la huelga de hambre concluyó después de cinco semanas.

37. Además, la fuente afirma que la detención del Sr. Thục vulneró su derecho a asistencia letrada. El artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto y el principio 18, párrafo 2, del Conjunto de Principios garantizan que toda persona acusada de un delito tiene derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección. Esta norma también se refleja en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que exige que se aseguren a los acusados las debidas garantías procesales.

38. En el presente caso, el Sr. Thục solo pudo reunirse con su abogado para preparar el juicio por la vía penal en dos ocasiones, y ninguna de ellas duró más de una hora. Durante el proceso de apelación, solo se le concedió acceso a su abogado una vez, por menos de dos horas. Los límites impuestos por las autoridades al acceso del Sr. Thục a asistencia letrada obstruyeron su derecho a un juicio justo.

39. Si bien se ignoran las razones exactas por las que se retrasó el acceso del Sr. Thục a asistencia letrada, la fuente afirma que el Gobierno ha aplazado sistemáticamente ese acceso en los casos relacionados con delitos contra la seguridad nacional. La fuente recuerda que el artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto exige que se garantice al acusado el pronto acceso a su abogado¹⁰, en tanto que el principio 15 del Conjunto de Principios establece que la comunicación con el abogado no debe denegarse por más de algunos días. Además, el principio 7 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados establece que el acceso a un abogado debe tener lugar, en cualquier caso, dentro de las 48 horas siguientes al arresto o a la detención.

40. Por último, la fuente alega que la reclusión del Sr. Thục conculcó su derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, de conformidad con el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14, párrafo 1, del Pacto y el principio 36 del Conjunto de Principios.

41. El Comité de Derechos Humanos ha reconocido dos requisitos esenciales de un juicio público e imparcial, con arreglo al artículo 14, párrafo 1, del Pacto. En primer lugar, no debe haber ninguna influencia, presión, intimidación o intrusión directa o indirecta y, en segundo lugar, se deben disponer medios adecuados para la asistencia de los miembros interesados del público¹¹. En este caso, la presencia de un número importante de militares en la vista del juicio en primera instancia del Sr. Thục no estaba justificada y era contraria a la ausencia de intimidación exigida. Según la fuente, es probable que el propósito de esta

¹⁰ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 34.

¹¹ *Ibid.*, párrs. 25 y 28.

presencia militar fuera presionar o intimidar indirectamente al juez, al abogado de la defensa y a los testigos. Además, a pesar de la presencia de representantes seleccionados de los medios de comunicación durante el juicio, se impidió asistir al público interesado. Solo se permitió entrar en la sala de audiencia a dos familiares cercanos del Sr. Thúc. Aunque el artículo 14, párrafo 1, del Pacto permite la exclusión del público en circunstancias excepcionales, el Tribunal Popular no demostró que esa exclusión fuera estrictamente necesaria.

42. Además, la independencia e imparcialidad del tribunal a que se hace referencia en el artículo 14, párrafo 1, son un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna. El Comité de Derechos Humanos ha subrayado la importancia de que el poder judicial goce de independencia real con respecto a la injerencia política del poder ejecutivo y legislativo¹². Según la fuente, da la sensación de que los tribunales vietnamitas están sometidos al Partido Comunista de Viet Nam. En el caso del Sr. Thúc, no se puede concluir que se cumpliera el criterio de independencia. Además, el Tribunal Popular se negó injustificadamente a admitir las pruebas de los testigos de la defensa y, al hacerlo, no transmitió una imagen de imparcialidad a un observador razonable.

Respuesta del Gobierno

43. El 31 de enero de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno con arreglo a su procedimiento ordinario de comunicación, pidiéndole que, a más tardar el 31 de marzo de 2020, facilitara información detallada sobre el caso del Sr. Thúc. También solicitó al Gobierno que aclarara las disposiciones jurídicas que justificaban su reclusión, así como su compatibilidad con las obligaciones contraídas por Viet Nam en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

44. El Gobierno solicitó una ampliación del plazo de respuesta, que le fue concedida, fijándose el 1 de mayo de 2020 como nueva fecha límite.

45. El Gobierno presentó su respuesta el 13 de mayo de 2020, es decir, 12 días después del plazo establecido. El Grupo de Trabajo no puede admitir una respuesta tardía como si se hubiera presentado dentro de los plazos. De conformidad con el párrafo 16 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo emitirá su opinión basándose en toda la información que ha recibido.

Deliberaciones

46. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

47. Como cuestión preliminar, el Grupo de Trabajo toma nota de que el Sr. Thúc falleció mientras estaba privado de libertad y, por lo tanto, ya no se encuentra recluido. No obstante, dado que el Sr. Thúc fue presuntamente objeto de graves violaciones de los derechos humanos, el Grupo de Trabajo considera que es importante emitir una opinión sobre su caso.

48. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración del derecho internacional constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68).

i. Categoría I

49. Según la fuente, estaba previsto que la prisión preventiva del Sr. Thúc finalizase el 5 de febrero de 2018. Sin embargo, a finales de enero de 2018, se prorrogó por otros siete meses, hasta la celebración del juicio, el 19 de septiembre de 2018. No hay nada que indique que el Sr. Thúc haya comparecido ante una autoridad judicial durante ese período para revisar la legalidad de su detención. De hecho, el Gobierno parece confirmar en su respuesta tardía que no se realizó esa revisión, señalando que, a fin de llevar a cabo

¹² *Ibid.*, párr. 19.

investigaciones exhaustivas, el organismo de investigación había prorrogado en dos ocasiones la prisión preventiva del Sr. Thúc por cuatro meses cada vez, y las prórrogas fueron aprobadas por la Fiscalía Popular. El Gobierno no explicó por qué el caso del Sr. Thúc revestía tal complejidad que justificaba esas prórrogas.

50. En su jurisprudencia y práctica, el Grupo de Trabajo ha dictaminado sistemáticamente que la Fiscalía Popular no es una autoridad judicial independiente y que no cumple los criterios del artículo 9 del Pacto¹³. En consecuencia, el Grupo de Trabajo considera que la prisión preventiva del Sr. Thúc se prolongó sin que se realizara una revisión judicial de su legalidad, lo que constituye una violación del derecho a comparecer sin demora ante una autoridad judicial recogido en el artículo 9, párrafo 3, del Pacto. Para llegar a esta conclusión, el Grupo de Trabajo reitera que, si bien el Código de Procedimiento Penal de 2003 de Viet Nam permite la prisión preventiva por períodos de cuatro meses, toda disposición legislativa que permita a la Fiscalía Popular prolongar la reclusión y que busque denegar el derecho a la revisión judicial es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos¹⁴.

51. Además, de conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, la prisión preventiva debe ser la excepción, no la regla, y ordenarse por el período más breve posible (A/HRC/19/57, párrs. 48 a 58). Es decir, en el artículo 9, párrafo 3, la libertad se reconoce como principio y su privación, como excepción (*ibid.*, párr. 54). La reclusión previa al juicio debe basarse en una determinación individualizada de que dicha medida resulta razonable y necesaria para fines tales como impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito¹⁵. En el presente caso, parece que no hubo una revisión judicial individualizada de la situación del Sr. Thúc ni se consideraron alternativas a la reclusión mientras permaneció en prisión preventiva durante más de 11 meses, desde su detención, el 5 de octubre de 2017, hasta la celebración del juicio, el 19 de septiembre de 2018. La prisión preventiva no se impuso ni revisó adecuadamente y, por lo tanto, carecía de fundamento jurídico.

52. Si bien la fuente no formuló ninguna alegación concreta relativa a la reclusión en régimen de aislamiento, de la información presentada se desprende que el Sr. Thúc fue recluido en régimen de aislamiento mientras permaneció en prisión preventiva, desde el momento de su detención, el 5 de octubre de 2017, hasta al menos abril de 2018. Según la fuente, no se permitió a los familiares del Sr. Thúc visitarlo mientras permaneció recluido en el centro de reclusión de Cham Mat, aunque sí se les concedieron derechos limitados de visita mientras estuvo hospitalizado durante una semana en abril de 2018. Además, la fuente afirma que la familia del Sr. Thúc nombró y dio instrucciones a un abogado para que lo representara en junio de 2018, fecha que parece ser el primer momento en que tuvo acceso a asistencia letrada. El Gobierno negó estas alegaciones en su respuesta tardía, pero no presentó ninguna otra información o argumento que refutara las afirmaciones de la fuente. En consecuencia, el Grupo de Trabajo está convencido de que se mantuvo al Sr. Thúc recluido en régimen de aislamiento durante un período de aproximadamente seis meses.

53. Como ha declarado el Grupo de Trabajo, la reclusión en régimen de aislamiento vulnera el derecho de las personas a impugnar la legalidad de la privación de libertad ante un tribunal según lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto¹⁶. La supervisión judicial de la privación de libertad constituye una salvaguardia fundamental de la libertad personal¹⁷ y un elemento esencial para garantizar que la reclusión tenga fundamento jurídico. Puesto que el Sr. Thúc no pudo impugnar su reclusión ante un tribunal, se conculcó su derecho a

¹³ E/CN.4/1995/31/Add.4, párr. 57 c), y opiniones núms. 16/2020, párr. 62; 15/2020, párr. 54; 45/2019, párr. 52; 44/2019, párr. 53; 46/2018, párr. 50; 35/2018, párr. 37, y 75/2017, párr. 48. Véanse también Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 32; CCPR/C/VNM/CO/3, párr. 26, y CAT/C/VNM/CO/1, párrs. 24 y 25.

¹⁴ Opinión núm. 46/2018, párrs. 50 y 51. Véase también CAT/C/VNM/CO/1, párrs. 24 y 25.

¹⁵ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 38.

¹⁶ Véanse las opiniones núms. 16/2020, 15/2020, 45/2019, 44/2019, 9/2019, 35/2018, 46/2017 y 45/2017.

¹⁷ A/HRC/30/37, párr. 3, y CAT/C/VNM/CO/1, párr. 24.

un recurso efectivo, reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 2, párrafo 3, del Pacto. También fue sustraído del amparo de la ley, lo que supone una violación de su derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 16 del Pacto.

54. Por último, el Grupo de Trabajo considera que la disposición en virtud de la cual se condenó al Sr. Thúc es tan vaga y amplia que resulta imposible invocar un fundamento jurídico para su privación de libertad. Como reconoce el Gobierno en su respuesta tardía, se condenó al Sr. Thúc por “llevar a cabo actividades encaminadas a derrocar al Gobierno popular”, con arreglo al artículo 79 del Código Penal de 1999¹⁸. El Grupo de Trabajo le ha planteado al Gobierno la cuestión del enjuiciamiento en virtud de leyes vagas y excesivamente amplias en numerosas ocasiones, y en opiniones anteriores ha señalado que el artículo 79 del Código Penal no cumple el principio de legalidad¹⁹. Dicho principio exige que las leyes se formulen con precisión suficiente para que sean accesibles y comprensibles para el ciudadano, de modo que este pueda modificar su conducta en consecuencia²⁰. El Sr. Thúc no podía prever que actividades pacíficas como el uso de los medios sociales para criticar la política del Gobierno en relación con la catástrofe ambiental de la planta siderúrgica de Formosa y la controversia territorial del mar de China meridional constituirían una conducta delictiva de conformidad con esa disposición.

55. Por estas razones, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno no estableció un fundamento jurídico para la privación de libertad del Sr. Thúc. Su reclusión fue arbitraria con arreglo a la categoría I.

ii. Categoría II

56. La fuente también alega que se privó al Sr. Thúc de su libertad como resultado del ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de opinión y de expresión y a participar en la dirección de los asuntos públicos, consagrados en los artículos 19 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 19 y 25 a) del Pacto.

57. El Sr. Thúc fue condenado en virtud del artículo 79 del Código Penal de 1999, según el cual las personas declaradas culpables de llevar a cabo actividades encaminadas a “derrocar al Gobierno popular” o de crear organizaciones con ese propósito, o adherirse a ellas, serán castigadas con las siguientes penas: a) en el caso de los organizadores, los instigadores y los participantes activos o quienes “provoquen consecuencias graves”, entre 12 y 20 años de prisión, reclusión a perpetuidad o pena de muerte; b) en el caso de otros cómplices, entre 5 y 15 años de prisión.

58. El Grupo de Trabajo ha examinado la aplicación del artículo 79 en numerosas opiniones relacionadas con Viet Nam y ha concluido que los cargos y las condenas con arreglo a esta disposición por el ejercicio pacífico de derechos no pueden considerarse compatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos ni con el Pacto²¹. Llegó a una conclusión similar durante su visita a Viet Nam en octubre de 1994, cuando observó que, al invocarse delitos vagos e imprecisos contra la seguridad nacional, no se distinguía entre los actos violentos que pueden suponer una amenaza para la seguridad nacional y el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de opinión y de expresión (E/CN.4/1995/31/Add.4, párrs. 58 a 60)²².

¹⁸ El 20 de junio de 2017, la Asamblea Nacional promulgó una versión revisada del Código Penal, que entró en vigor el 1 de enero de 2018. El artículo 79 fue reenumerado y se mantiene vigente como artículo 109 del Código revisado.

¹⁹ Opiniones núms. 45/2019, párr. 54; 9/2019, párr. 39; 46/2018, párr. 62; 36/2018, párr. 51; 35/2018, párr. 36; 40/2016, párr. 36; 26/2013, párr. 68; 27/2012, párr. 41, y 46/2011, párr. 22. Véase también CCPR/C/VNM/CO/3, párrs. 45 y 46.

²⁰ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 41/2017, párrs. 98 a 101. Véase también la opinión núm. 62/2018, párrs. 57 a 59, y la observación general núm. 35 del Comité de Derechos Humanos, párr. 22.

²¹ Véanse las opiniones núms. 45/2019, 9/2019, 46/2018, 36/2018, 35/2018, 40/2016, 26/2013, 27/2012 y 46/2011. Véase también A/HRC/41/7, párrs. 38.73 y 38.171.

²² Véase también CCPR/C/VNM/CO/3, párr. 45 d).

59. En el presente caso, la fuente sostiene que se condenó al Sr. Thúc con arreglo al artículo 79 a fin de castigarlo por criticar la política del Gobierno a través de los medios sociales. Según la fuente, al condenar al Sr. Thúc, el Gobierno buscaba provocar un efecto disuasorio, a fin de desalentar las críticas al Estado por parte de otras personas. Fue privado de libertad tras participar en debates sobre una serie de cuestiones políticas, como la política estatal en materia de medio ambiente. La fuente sostiene que, al expresar sus opiniones políticas en línea, el Sr. Thúc pretendía contribuir de manera directa a los esfuerzos por lograr que las autoridades rindiesen cuentas. Por otra parte, el Gobierno afirma en su respuesta tardía que el Sr. Thúc era miembro de una organización terrorista extranjera que incita al odio y se relaciona con terroristas radicados en Viet Nam a fin de provocar disturbios armados con el objetivo de oponerse al Gobierno popular. Según este, el Sr. Thúc utilizaba las redes sociales para ponerse en contacto con otros miembros con intención de incitar a la violencia y publicaba en Internet numerosos artículos falsos en los que llamaba al derrocamiento del Gobierno de Viet Nam. Sin embargo, el Gobierno no proporcionó detalles concretos de las presuntas actividades delictivas del Sr. Thúc, como las fechas y horas de los supuestos actos, ni ninguna otra explicación de sus afirmaciones.

60. El Grupo de Trabajo recuerda que en el artículo 19, párrafo 2), del Pacto se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; ese derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Este derecho abarca el pensamiento político, los comentarios sobre los asuntos públicos, la discusión sobre derechos humanos y el periodismo²³. Protege el derecho a tener y expresar opiniones, incluidas aquellas que son críticas con la política gubernamental o no se ajustan a ella²⁴. El Grupo de Trabajo considera que la conducta del Sr. Thúc se inscribió dentro del derecho a la libertad de opinión y de expresión, protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto, y que fue privado de libertad por ejercer esos derechos. Para llegar a esta conclusión, el Grupo de Trabajo toma nota de que la detención del Sr. Thúc tuvo lugar poco después de publicar en Internet un comentario relativo a la gestión del Gobierno de la controversia territorial del mar de China meridional.

61. Además, las críticas del Sr. Thúc a la política del Gobierno a través de sus comentarios en medios sociales y su actividad como periodista se referían a cuestiones de interés público. El Grupo de Trabajo considera que fue detenido por ejercer su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, consagrado en el artículo 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 25 a) del Pacto²⁵.

62. Nada indica que puedan aplicarse al presente caso las restricciones permisibles a esos derechos recogidas en los artículos 19, párrafo 3, y 25 del Pacto. El Grupo de Trabajo no quedó convencido de que el enjuiciamiento del Sr. Thúc fuese necesario para proteger un interés legítimo en virtud de estas disposiciones, ni de que su condena y prolongada reclusión fuesen una respuesta proporcionada a sus actividades. Es importante señalar que no hay indicios que indiquen que las críticas al Gobierno por parte del Sr. Thúc incitasen directa o indirectamente a la violencia o que pudiera considerarse razonablemente que amenazaban la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos o la reputación de los demás. El Consejo de Derechos Humanos ha exhortado a los Estados a que se abstengan de imponer restricciones en virtud del artículo 19, párrafo 3, que no sean compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos²⁶. El Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

²³ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34, párr. 11.

²⁴ Opiniones núms. 8/2019, párr. 55, y 79/2017, párr. 55.

²⁵ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 25, párr. 8 (en que se establece que los ciudadanos pueden participar en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate público). Véanse también las opiniones núms. 16/2020, 15/2020, 45/2019, 44/2019, 9/2019, 46/2018, 45/2018, 36/2018, 35/2018, 40/2016, 26/2013, 42/2012 y 46/2011.

²⁶ Véase la resolución 12/16, párr. 5 p).

63. De conformidad con los artículos 1 y 6 c) de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y a señalar a la atención del público la observancia de los derechos humanos²⁷. La fuente ha demostrado que el Sr. Thục fue privado de libertad por ejercer los derechos que lo amparaban en virtud de la Declaración. El Grupo de Trabajo ha determinado que privar a personas de su libertad sobre la base de sus actividades como defensores de los derechos humanos vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y a la igual protección de la ley, consagrado en el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 26 del Pacto²⁸.

64. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que la privación de libertad del Sr. Thục se derivó del ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como del derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, y fue contraria al artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 26 del Pacto. Su reclusión fue arbitraria con arreglo a la categoría II.

iii. Categoría III

65. Habida cuenta de su conclusión de que la privación de libertad del Sr. Thục fue arbitraria con arreglo a la categoría II, el Grupo de Trabajo subraya que este no debería haber sido enjuiciado. Sin embargo, fue juzgado el 19 de septiembre de 2018 y se confirmó su condena en apelación el 17 de enero de 2019, con una reducción menor de la condena, de un año. La información presentada por la fuente pone de manifiesto vulneraciones del derecho del Sr. Thục a un juicio imparcial.

66. El Grupo de Trabajo considera que no se le reconoció al Sr. Thục el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, dado que transcurrieron más de 11 meses desde su detención, el 5 de octubre de 2017, hasta el juicio, el 19 de septiembre de 2018. La información proporcionada por el Gobierno en su respuesta tardía confirma las fechas de la detención y el juicio. El carácter razonable de la dilación en llevar el caso a juicio debe evaluarse a la luz de las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta la complejidad de este, la conducta del imputado y la manera en que las autoridades hayan abordado el asunto²⁹. El retraso en juzgar al Sr. Thục fue inaceptablemente largo, lo que supuso una violación de los artículos 9, párrafo 3, y 14, párrafo 3 c), del Pacto. Como se ha señalado anteriormente, está claro que el Sr. Thục no debería haber sido detenido por el ejercicio pacífico de los derechos que lo amparaban en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y que la demora en llevarlo a juicio fue inaceptable³⁰.

67. Además, la fuente afirma que la privación de libertad del Sr. Thục fue arbitraria porque se vulneró su derecho a la presunción de inocencia. Según la fuente, durante la prisión preventiva fue objeto de medidas punitivas, como restricciones en la cantidad de alimentos que recibía, la prohibición de recibir dinero de sus familiares, la limitación de las comunicaciones con sus familiares y el hecho de tener que soportar un calor sofocante en una celda sin aire acondicionado ni ventiladores. Si bien estas medidas parecen ser contrarias a varias disposiciones de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (las Reglas de Nelson Mandela)³¹, el Grupo de Trabajo no quedó convencido de que por sí solas violaran la presunción de inocencia del Sr. Thục. No obstante, son pertinentes en lo relativo a su trato justo y equitativo, cuestión que se examina más adelante.

²⁷ Véase también la resolución 74/146 de la Asamblea General, párr. 12.

²⁸ Véanse las opiniones núms. 16/2020, 15/2020, 45/2019, 44/2019, 9/2019, 46/2018, 45/2018, 36/2018, 35/2018, 79/2017 y 75/2017. Véase también CCPR/C/VNM/CO/3, párrs. 51 y 52.

²⁹ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 37, y observación general núm. 32, párr. 35.

³⁰ Véase la opinión núm. 46/2019, párr. 63, en la que el Grupo de Trabajo no pudo concluir que hubiera tenido lugar una violación conforme a la categoría II ni constatar que un retraso de 16 meses hasta la celebración del juicio fuese irrazonable. Véanse también las opiniones núms. 16/2020 y 15/2020.

³¹ Reglas 13, 22, 43, párrafo 3 y 58, párrafo 1. Véase también el Conjunto de Principios, principios 15 y 19.

68. El Grupo de Trabajo toma nota de la alegación de la fuente, no impugnada por el Gobierno, de que la vista del juicio del Sr. Thục ante el Tribunal Popular de la provincia de Hòa Bình, celebrada el 19 de septiembre de 2018, duró solo cinco horas, de las 8.00 a las 13.00 horas. Fue una vista muy breve, especialmente habida cuenta de la gravedad de los cargos que se imputaban al Sr. Thục, acusado de amenazar la seguridad nacional en virtud del artículo 79 del Código Penal. Tras el juicio, se le impuso una severa pena de 14 años de prisión y 5 años de arresto domiciliario, que posteriormente fue objeto de una reducción menor en apelación. Como ha señalado el Grupo de Trabajo³², la brevedad de un juicio por un delito grave sugiere que se había determinado la culpabilidad del Sr. Thục antes de la vista, lo cual vulnera el derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14, párrafo 2, del Pacto. Además, la importante presencia policial y militar en el juicio en primera instancia contribuyó a la denegación de la presunción de inocencia, ya que, según parece, se presentó al Sr. Thục ante el tribunal de un modo que daba a entender que podía tratarse de un delincuente cuya peligrosidad justificaba fuertes medidas de seguridad³³.

69. Además, la fuente afirma que la detención del Sr. Thục vulneró su derecho a asistencia letrada. Solo pudo reunirse con su abogado en dos ocasiones a partir de junio de 2018, a fin de que preparase el juicio por la vía penal, y ninguna de esas reuniones duró más de una hora. Durante el proceso de apelación, solo se le concedió acceso a su abogado una vez, por menos de dos horas. Los límites impuestos por las autoridades al acceso del Sr. Thục a asistencia letrada obstruyeron su derecho a un juicio justo. El Gobierno niega estas alegaciones en su respuesta tardía, señalando que, después de la fase de investigación, la Fiscalía Popular informó a los familiares del Sr. Thục del procedimiento de nombramiento de un asesor letrado, pero estos no presentaron la documentación requerida. Así pues, las autoridades le asignaron un abogado defensor, con el que se reunió en dos ocasiones. Según el Gobierno, el abogado elegido por el Sr. Thục fue designado posteriormente y se reunió con él en tres ocasiones por un tiempo suficiente solicitado por el letrado.

70. Las comunicaciones del Gobierno no convencieron al Grupo de Trabajo, ya que el hecho de que no se presentara la documentación no es razón suficiente para denegar o retrasar el acceso a un abogado a una persona acusada de un delito grave, que, en última instancia, fue condenada a 13 años de prisión. Además, el Grupo de Trabajo observa que el Gobierno solo declara haber informado a los familiares del Sr. Thục sobre el procedimiento una vez concluida la fase de investigación. Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a asistencia jurídica de un abogado de su elección, en cualquier momento de su detención, en particular inmediatamente después de que se practique la detención, y ese acceso se debe facilitar sin demora³⁴. El hecho de que no se proporcionara al Sr. Thục acceso a un abogado inmediatamente después de su detención y durante un tiempo suficiente vulneró el derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, recogido en el artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto. Toda legislación que pretenda suprimir el derecho a asistencia letrada o demorarla hasta después de la fase de investigación es intrínsecamente contraria a las normas internacionales de derechos humanos (CCPR/C/VNM/CO/3, párrs. 25, 26, 35 y 36). El presente es otro ejemplo de caso en el que se ha denegado o limitado la representación letrada a personas que hacían frente a acusaciones graves, lo que parece indicar que en Viet Nam se deniega sistemáticamente el acceso a asistencia letrada en los procesos penales³⁵.

³² Véanse las opiniones núms. 15/2020, 45/2019, 44/2019, 46/2018, 45/2018, 36/2018 y 75/2017.

³³ Opiniones núms. 83/2019, párr. 73; 36/2018, párr. 55; 79/2017, párr. 62, y 40/2016, párr. 41. Véase también Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32, párr. 30.

³⁴ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, principio 9 y directriz 8. Véase también Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 35, y opinión núm. 16/2020, párrs. 75 y 76.

³⁵ Véanse las opiniones núms. 16/2020, 15/2020, 45/2019, 44/2019, 9/2019, 46/2018, 35/2018, 79/2017, 75/2017, 27/2017, 26/2017 y 40/2016. Véase también CCPR/C/VNM/CO/3, párrs. 25 y 26, y CAT/C/VNM/CO/1, párrs. 16 y 17.

71. Además, la fuente alega que la privación de libertad del Sr. Thục violó su derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial. Según la fuente, la presencia de un número considerable de militares en la vista del juicio en primera instancia del Sr. Thục no estaba justificada y probablemente tenía por objeto ejercer presión sobre el juez, el abogado y los testigos. Además, a pesar de la presencia de representantes seleccionados de los medios de comunicación durante el juicio, los agentes de policía bloquearon las calles circundantes al Tribunal Popular de la provincia de Hòa Bình a fin de impedir que el público asistiera al juicio y disuadir a los activistas locales de protestar. Solo se permitió entrar en la sala de audiencia a dos familiares cercanos del Sr. Thục. Durante el juicio no se permitió testificar a ninguno de los 15 testigos de la defensa. En su respuesta tardía, el Gobierno parece negar estas alegaciones, señalando que el Tribunal había citado a ciertos testigos y que se había permitido a algunos familiares asistir al juicio. El Gobierno también señaló que la presencia policial era necesaria para organizar la seguridad del juicio, pero no proporcionó información adicional que respaldase o justificase ninguna de sus afirmaciones.

72. El Grupo de Trabajo considera que la fuente ha demostrado que el juicio del Sr. Thục no cumplió los requisitos de un juicio imparcial y público ante un tribunal competente, independiente e imparcial, lo que supone una vulneración del artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14, párrafo 1, del Pacto. La fuente ha proporcionado información fidedigna de que hubo una fuerte presencia de seguridad en el juicio y que se restringió la asistencia del público. Tampoco había nada que indicase que en el presente caso fuera aplicable alguna de las excepciones al derecho a ser oído públicamente previstas en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto. Además, al rechazar el testimonio de los testigos de la defensa, el Tribunal Popular conculcó el derecho que amparaba al Sr. Thục, en virtud del artículo 14, párrafo 3 e), del Pacto, a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos fueran interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Habida cuenta de las graves acusaciones formuladas por la fuente en relación con la falta de independencia del Tribunal Popular de la provincia de Hòa Bình en el presente caso, y en general de los tribunales de Viet Nam, el Grupo de Trabajo ha decidido remitir este caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Por último, el Grupo de Trabajo considera que el presunto trato punitivo que recibió el Sr. Thục durante la prisión preventiva, incluidas las restricciones en la cantidad de alimentos que recibía y la limitación de las comunicaciones con su familia, repercutió en su capacidad de defenderse y, por consiguiente, en la imparcialidad general de las actuaciones contra él.

73. Por último, el Grupo de Trabajo toma nota de las alegaciones de la fuente de que el Sr. Thục fue golpeado y torturado por agentes de policía en un intento de obligarlo a confesar los cargos que se le imputaban y de que las lesiones sufridas lo llevaron a permanecer hospitalizado durante una semana en abril de 2018, unos cinco meses antes de su juicio. También se alega que se restringió el suministro de alimentos al Sr. Thục y que permaneció recluso en condiciones deficientes y con temperaturas sofocantes. No está claro si el Sr. Thục realmente confesó, ni si las torturas, los malos tratos y las malas condiciones de reclusión que presuntamente sufrió afectaron a su capacidad de participar en su propia defensa, factores ambos pertinentes para la imparcialidad de su juicio. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo no puede llegar a una conclusión sobre estas alegaciones, que el Gobierno negó en su totalidad. No obstante, dada la gravedad del trato que presuntamente recibió el Sr. Thục, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

74. El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que las vulneraciones del derecho a un juicio imparcial fueron de tal gravedad que confieren a la detención del Sr. Thục un carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

iv. Categoría V

75. El Grupo de Trabajo considera que el Sr. Thục fue objeto de persecución debido a sus actividades pacíficas, como unirse a otros activistas y organizaciones de defensa del medio ambiente para criticar la respuesta del Estado ante el derrame químico de la planta siderúrgica de Formosa en 2016 y la manera en que el Gobierno afrontó la controversia

territorial en el mar de China meridional. Como ha observado en otras ocasiones el Grupo de Trabajo, en Viet Nam parece haber una pauta de detención de activistas que han tratado de sensibilizar sobre la catástrofe ambiental de la planta siderúrgica de Formosa³⁶ y la controversia territorial en el mar de China meridional³⁷. Además, en el análisis realizado antes en relación con la categoría II, el Grupo de Trabajo estableció que la privación de libertad del Sr. Thúc fue resultado del ejercicio pacífico de los derechos que lo asistían en virtud del derecho internacional. Cuando la privación de libertad se debe al ejercicio activo de derechos civiles y políticos, existen sólidas razones para suponer que esta constituye además una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de opinión política o de otra índole³⁸.

76. El Grupo de Trabajo considera que el Sr. Thúc fue privado de su libertad por motivos discriminatorios, es decir, debido a su condición de defensor de los derechos humanos y sobre la base de sus opiniones políticas o de otra índole, al pretender que las autoridades rindiesen cuentas. Su privación de libertad constituye una violación de los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto, y es arbitraria conforme a la categoría V. El Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

v. Observaciones finales

77. El Grupo de Trabajo expresa su profunda preocupación por el fallecimiento del Sr. Thúc, acaecido el 10 de diciembre de 2019, mientras cumplía una pena de 13 años ratificada en apelación el 17 de enero de 2019. Según la fuente, la salud del Sr. Thúc se deterioró rápidamente tras su detención, practicada el 5 de octubre de 2017. Durante el tiempo que permaneció en prisión preventiva se restringió la cantidad de alimentos que recibía. Fue presuntamente golpeado y torturado por agentes de policía y sufrió lesiones que lo llevaron a ser hospitalizado durante una semana en abril de 2018. La fuente alega además que, en junio de 2019, el Sr. Thúc inició una huelga de hambre que duró más de cinco semanas, con la que pretendía protestar por las condiciones de reclusión, en particular por la elevada temperatura en su celda cuando se retiraron los ventiladores eléctricos. No está claro si estos factores contribuyeron a la muerte del Sr. Thúc. El Gobierno niega estas alegaciones en su respuesta tardía, señalando la conclusión oficial del organismo de investigación de la policía, emitida el 5 de febrero de 2020, según la cual el Sr. Thúc falleció como consecuencia de ciertos problemas médicos graves, entre los que se contaba una hemorragia cerebral, y que no había indicios de lesiones ni actividad delictiva alguna que pudiera haber causado su muerte.

78. Además, el Grupo de Trabajo está profundamente preocupado por el trato que presuntamente recibieron los familiares del Sr. Thúc antes y después del fallecimiento de este. Entre otras cosas, se les proporcionó información limitada sobre las circunstancias de su muerte, se les denegó la devolución del cuerpo, incluso por un período breve de tiempo, para que la comunidad pudiera presentar sus respetos, fue enterrado en el recinto de la prisión sin que sus familiares pudiesen opinar sobre la ceremonia fúnebre y se les sigue denegando el acceso a la tumba. El Gobierno no ha dado respuesta a las alegaciones relativas al acceso al cuerpo del Sr. Thúc ni a su entierro.

79. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que realice urgentemente una investigación exhaustiva, eficaz e independiente de las circunstancias que dieron lugar a la muerte del Sr. Thúc mientras estaba en prisión. La investigación debe incluir un informe detallado de un experto independiente sobre la atención médica y de otro tipo prestada al Sr. Thúc desde su detención y debe llevarse a cabo de manera transparente, con la plena participación de los familiares de la víctima y sus representantes legales y médicos³⁹. Las autoridades

³⁶ Véanse las opiniones núms. 45/2019, 44/2019, 9/2019, 46/2018, 45/2018, 35/2018, 79/2017 y 27/2017. Véase también CCPR/C/VNM/CO/3, párrs. 47, 48, 51 y 52.

³⁷ Véanse las opiniones núms. 35/2018, 75/2017, 40/2016 y 46/2011.

³⁸ Opiniones núms. 59/2019, párr. 79; 13/2018, párr. 34, y 88/2017, párr. 43.

³⁹ Conjunto de Principios, principio 34.

también deben entregar inmediatamente los restos del Sr. Thục a su familia⁴⁰ y modificar la ley que, según se informa, exige que los presos que hayan fallecido estando bajo custodia permanezcan enterrados en el recinto de la prisión durante tres años antes de que se puedan recuperar sus restos mortales. Dada la incertidumbre que rodea la muerte del Sr. Thục, el Grupo de Trabajo remitirá la cuestión a la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

80. El presente caso es uno de los muchos que se han presentado al Grupo de Trabajo en los últimos años en relación con la detención arbitraria en Viet Nam⁴¹. Estos casos siguen una pauta habitual de reclusión prolongada en espera de juicio sin acceso a revisión judicial; reclusión en régimen de incomunicación; enjuiciamiento invocando delitos tipificados con vaguedad por el ejercicio pacífico de los derechos humanos; denegación de acceso a asistencia letrada; un juicio breve y a puerta cerrada, en el que no se observan las garantías procesales; la imposición de penas desproporcionadas, y la denegación de acceso al mundo exterior. Esta pauta indica un problema sistémico de detención arbitraria en Viet Nam que, de continuar, puede constituir una violación grave del derecho internacional⁴².

81. El Grupo de Trabajo celebraría tener la oportunidad de cooperar de manera constructiva con el Gobierno para abordar la cuestión de la detención arbitraria. Ha transcurrido un tiempo considerable desde su última visita a Viet Nam, que tuvo lugar en octubre de 1994, y estima que es el momento oportuno para visitar el país de nuevo. El 11 de junio de 2018, el Grupo de Trabajo reiteró una vez más su solicitud al Gobierno para realizar una visita al país y seguirá esperando una respuesta favorable al respecto⁴³.

Decisión

82. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Đào Quang Thục es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 y 21, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafos 1 y 3, 9, 14, 16, 19, 25 a) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

83. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Viet Nam que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Thục sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

84. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, y en particular el fallecimiento del Sr. Thục en prisión, el remedio adecuado sería entregar inmediatamente los restos mortales a sus familiares⁴⁴ y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

85. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad y el fallecimiento del Sr. Thục y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

86. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno que armonice su legislación, en particular el artículo 79 del Código Penal (ahora, artículo 109 del Código revisado), con las recomendaciones formuladas en la presente opinión y con los compromisos contraídos por Viet Nam en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

⁴⁰ Véanse las opiniones núms. 24/2020 y 56/2019.

⁴¹ Véanse las opiniones núms. 16/2020, 15/2020, 45/2019, 44/2019, 9/2019, 8/2019, 46/2018, 45/2018, 36/2018, 35/2018, 79/2017, 75/2017, 27/2017, 26/2017, 40/2016, 46/2015 y 45/2015.

⁴² Opinión núm. 47/2012, párr. 22.

⁴³ Véase CAT/C/VNM/CO/1, párr. 46, donde el Comité contra la Tortura recomienda que el Gobierno curse una invitación al Grupo de Trabajo para que este visite el país.

⁴⁴ Opinión núm. 56/2019, párr. 102.

87. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y a la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, para que tomen las medidas correspondientes.

88. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

89. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a los familiares del Sr. Thục;
- b) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Thục y, de ser así, el resultado de la investigación;
- c) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Viet Nam con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- d) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

90. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

91. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

92. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado⁴⁵.

[Aprobada el 24 de agosto de 2020]

⁴⁵ Véase la resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.